

# NUEVA CONAF: EL SERNAFOR

## DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11175-01

REFERENCIA	Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Hacienda, De Vivienda y Urbanismo, De Agricultura y De Medio Ambiente
INGRESO	4 de abril de 2017
ARTICULADO	Tres artículos permanentes y diez transitorios; el artículo primero permanente, en 25 artículos, crea el nuevo el Servicio Nacional Forestal, en reemplazo de la Corporación Nacional Forestal


## OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Se trata de un nuevo intento por regularizar la anómala institucionalidad en que se encuentra la CONAF, la que actualmente está constituida como persona jurídica de derecho privado, pero que ejerce potestades públicas.

Ya en 2011, se había buscado una solución, en parte similar a la que ahora se presenta, pero que fue rechazada por el Senado. Uno de los aspectos clave de lo que está en juego son las aspiraciones remuneratorias del personal. Por ello es posible anticipar en parte, dónde se trabará la discusión, pues los funcionarios continuarían adscritos al Código del Trabajo, pero tendrá también que acogerse a normas del sector público, incluyendo la Escala Única de Sueldos.

Por otra parte, la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado estará bajo tutela del nuevo Servicio, mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se encuentra aún en su primer trámite legislativo.

Las atribuciones especiales que se le otorgan al nuevo Servicio para la protección contra incendios, incluyendo la elaboración de planes regionales de protección contra incendios forestales, deberán revisarse cuidadosamente, pues se incluyen atribuciones sobre una “interfaz” urbano forestal, pero sin que se observe un equilibrio entre las atribuciones correspondientes a ambos sectores.

La mayor eficacia para actuar frente a una catástrofe, así como contar con adecuados planes de prevención y extinción de incendios, no se asegura por el hecho de contar con un nuevo servicio público, sino, con un diseño institucional adecuado y, con una mejor gestión y coordinación entre las entidades actoras y funciones claras entre quienes están llamados a intervenir 

## **CONTENIDO DEL** **PROYECTO DE LEY**

- 1.- Se crea un servicio público denominado Servicio Nacional Forestal-SERNAFOR (que será el continuador de la actual CONAF), descentralizado y con patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.


Se establece la función y atribuciones del Servicio, debiendo destacarse la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetales <sup>1</sup> del país y de los componentes de la naturaleza asociados a estas. Además, podrá integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación; ejecutar y promover programas de conocimiento científico, educación, divulgación, extensión, capacitación y asistencia técnica, sobre las materias objeto del Servicio. Además, podrá realizar estudios, por sí o a través de terceros, y divulgarlos.

En otro ámbito, le corresponderá velar por la protección contra incendios forestales, incluyendo zonas de interfaz urbano forestal, esto es, zonas en las que una formación vegetal entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas, definidas por los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y/o Planes Reguladores o Seccionales.

- 2.- Se regula el régimen jurídico y remuneracional del personal del Servicio, el que continuará afecto al Código del Trabajo, pero además a la Escala Única de Remuneraciones del Sector público – EUS – y a diversas normas estatutarias sobre probidad y otras obligaciones funcionarias.

Habrá un sistema de evaluación de desempeño, de sanciones por infracción a las normas y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

Mediante decreto con fuerza de ley se fijará la planta del personal y se garantiza la no disminución de las remuneraciones del personal de la CONAF traspasado al Servicio.

- 3.- Se establece el patrimonio del Servicio, proveniente principalmente de la ley de presupuestos anual.
- 4.- El servicio evaluará los planes de manejo de acuerdo a la legislación forestal 

---

<sup>1</sup> El texto del proyecto utiliza repetidamente el término “vegetacional”.

## IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

### ANTECEDENTES

En los años setenta a instancias de la CORFO, se crean varias personas jurídicas de derecho privado para contribuir al desarrollo del país en aspectos específicos, se trata de los denominados “institutos CORFO”. Uno de ellos, fue la “Corporación Nacional Forestal-CONAF”, cuyos estatutos fueron aprobados por decretos del Ministerio de Justicia, como se hace con cualquier fundación o corporación.

Luego, en 1984, se publicó la Ley N° 18.348, que creó la “Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Renovables” como una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio, y dotada de ciertas funciones y atribuciones propias de los entes públicos, destinada a remplazar al aludido instituto CORFO.

Sin embargo, dicha ley nunca entró en vigencia, pues ésta quedó supeditada<sup>2</sup> a la fecha en que se publicara en el Diario Oficial el decreto supremo que declarare disuelta la corporación de derecho privado. En tanto ello no ocurra, solo ha tenido existencia legal la CONAF-Corporación de Derecho Privado y no la CONAF-Institución Autónoma del Estado.

La situación anterior, en que solo existe un ente privado, genera dos inconvenientes:

- a) La CONAF ejerce potestades públicas, incluyendo atribuciones fiscalizadoras y de aprobación o rechazo de planes de manejo, pese a ser un órgano privado, lo que contraviene expresamente lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado<sup>3</sup>, y
- b) La Ley N° 18.362, que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), debía entrar en vigencia cuando a su vez entre en vigencia la señalada Ley N° 18.384 que creó la CONAF-servicio público. Como ésta aún no entra en vigencia, la Ley N° 20.283 sobre Bosque Nativo se apoya sobre una base legalmente dudosa, pues se remite expresamente a la CONAF-CORFO en el artículo 2°, N° 8, y otros, para regular los planes de manejo.

### ALGUNAS CIFRAS DEL SECTOR

De acuerdo a cifras entregadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO – en 2010, las hectáreas de bosques en el mundo

<sup>2</sup> De acuerdo al artículo 19 de la misma ley.

<sup>3</sup> El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales. Estas no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.

alcanzaban los 4.000 millones, cubriendo un 31% de la superficie continental del planeta. De ellas, un 93% es Bosque Natural, mientras que el 7% restante, esto es, 264 millones de hectáreas, son bosques plantados. Alrededor de 50 millones de hectáreas de las plantaciones en el mundo de rápido crecimiento.

A nivel local, y de acuerdo a datos de la Corporación Chilena de la Madera, un 23,2% del territorio nacional corresponde a bosques. De estos, 14,3 millones de hectáreas son de bosque nativo, donde 4,1 millones de éstas corresponden a áreas silvestres protegidas del Estado y 0,8 millones son áreas silvestres protegidas privadas. Las restantes 2,4 millones de hectáreas corresponden a bosques plantados. Cabe hacer presente que las plantaciones forestales han sido mayoritariamente realizadas en suelos degradados, deteniendo la erosión.

El sector forestal participa con el 3% del PIB y representa el 8% de las exportaciones totales del país, generando 121.000 empleos directos y cerca de 180.000 empleos indirectos. Aun sin considerar en estas cifras, la capacidad de captación de CO<sub>2</sub>, ni la capacidad de generación que tienen los bosques, se demuestra la relevancia que tiene el sector en nuestro país.

Razón de lo anterior, es que la regulación sobre esta materia es de temprana data. Ya en 1937 se dictó a través del Decreto N° 4.363, del entonces Ministerio de Tierras y Colonización, la Ley de Bosques, y en 1974, el Decreto Ley N° 701, que otorgó una bonificación para la forestación o estabilización de dunas en suelos de aptitud preferentemente forestal y una bonificación y beneficio tributario para realizar actividades de administración y manejo de bosques plantados en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

Más tarde, en 1998, a través de la Ley N°19.561, se modificó el citado D.L. N° 701, mediante el cual se incentiva la forestación de pequeños propietarios y de suelos frágiles y degradados y las prácticas de recuperación de suelos, excluyendo a las grandes empresas. El año 2011, la Ley N°20.488, prorrogó la vigencia del Decreto Ley y aumentó los incentivos a la forestación. Sin embargo, esta terminó su vigencia en diciembre de 2012, a partir de lo cual las forestaciones y otras actividades bonificables ya no son susceptibles de bonificarse como lo establecía el artículo 12 del D.L. 701.

## NECESIDAD DE LEGISLAR

El conjunto de la legislación antes referida, además de objetable técnicamente, es anómala desde el punto de vista del ejercicio de las atribuciones que la ley debe entregar a los organismos del Estado conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

A este respecto debe tenerse presente lo expresado por el Tribunal Constitucional en control del proyecto de ley que dio origen a la Ley N° 20.283, publicada el 30 de julio de 2008, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Al respecto dijo<sup>4</sup>: “esta Magistratura hace presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente caso, exhorta a S.E. la Presidenta de la República para que

<sup>4</sup> Sentencia del 1 de julio de 2008, Control de constitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Boletín N° 669-01), Rol 1.024-08.

regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del decreto supremo a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado”.

De esta forma, cualquier proyecto de ley en materia forestal, en que se haga referencia a las atribuciones de la actual CONAF, necesariamente va a ser objetado por el Tribunal Constitucional, sea por la vía de control constitucional o por la vía de algún requerimiento que eventualmente se presentare. Solo cabe, por lo tanto, legislar creando un organismo público, puesto que la alternativa de dictar el decreto derogatorio de la CONAF para hacer entrar en vigencia, la Ley N° 18.348, ya no parece viable dado el tiempo transcurrido y la nueva realidad forestal que se presenta en el país, con características diversas a las tenidas en consideración en 1984.

Este esquema normativo impropio de un adecuado ordenamiento jurídico, requiere que se legisle, creando los órganos públicos capaces de ejercer legalmente las potestades que se les encomiendan para el funcionamiento de la institucionalidad silvícola nacional. El proyecto de ley que ahora se comenta está llamado a ordenar esta situación.

Cabe hacer presente que, en marzo de 2011 la Administración del Presidente Piñera ingresó al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que creaba el Servicio Nacional Forestal CONAF<sup>5</sup>. El nuevo Servicio, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionaría con el Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura,

y se desconcentraba territorialmente a través de Direcciones Regionales, estaba afecto al Sistema de Alta Dirección Pública. Su objeto era contribuir al desarrollo sustentable del país, impulsando la preservación, conservación, protección, rehabilitación y aprovechamiento de los recursos y ecosistemas forestales, formaciones xerofíticas, bosques urbanos y los recursos naturales renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con el recurso forestal.

Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Senado en el año 2012, principalmente por críticas a los aspectos remuneracionales de los trabajadores y sobre la administración de las áreas silvestres protegidas, que estarían a cargo del futuro Servicio para la Biodiversidad y Áreas Protegidas -SBAP-. Pasaron más de cinco años hasta ver un nuevo proyecto sobre la materia.

Sobre este último punto, debe sumarse el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Boletín 7487-12) ingresado a trámite legislativo en el mes de marzo de 2011 pero retirado de tramitación en junio de 2014. En esta misma fecha se presentó otro Proyecto de Ley que crea el mismo Servicio SBAP (Boletín 9404-12), actualmente en Primer Trámite Constitucional en el Senado.

Ahora bien, el proyecto que se presenta y que tiene como objeto crear el nuevo SERNAFOR, cumple con regular por ley esta materia, pero no permite ordenar institucionalmente los instrumentos que conforman el sector, y que son, por una parte la actual CONAF, que se transformará en el propuesto Servicio; el Instituto Forestal (INFOR), organismo esencialmente técnico con competencia en investigación, y un

5 Boletín N° 7486-01

Consejo de Política Forestal que de hecho ya existe, aunque no está creado por ley<sup>6</sup>, además de las herramientas de fomento forestal y protección contra incendios.

## LAS FUNCIONES Y OBJETO DEL SERVICIO

El Servicio que se crea tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas. Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de estos recursos, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable.

Sin duda, este título del Proyecto no puede analizarse aisladamente y debe revisarse de la mano del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas<sup>7</sup>.

Al revisar la definición que contempla el proyecto del SERNAFOR sobre “formación vegetacional”,

se dispone que esta es el conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones, y aquellas que dispone el proyecto del SBAP en cuanto a los ecosistemas amenazados y degradados<sup>8</sup>, es posible concluir que el nuevo Servicio Forestal quedará sólo como un controlador de plantaciones de privados además de combatir incendios, y todo aquello relacionado con el bosque nativo y recuperación, quedaría bajo la supeditación del Ministerio del Medio Ambiente.

Junto con ello, existen varias duplicaciones de funciones, como aquellas de investigación con el Instituto Forestal.

En conjunto con lo anterior, y al igual que el año 2011, será un tema de controversia lo relativo a la Administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, pues mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal deberá administrar estas Áreas. Sólo una vez dictada la ley que crea el SBAB, el SENAFOR deberá administrar las categorías de Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Natural y Reserva Forestal. Para ello, se crea transitoriamente un estamento de Guardaparques. Cabe hacer presente que el Proyecto de Ley que crea el SBAP, Boletín N°9404-12, se encuentra aún en su primer trámite legislativo, luego de ser ingresada una nueva iniciativa sobre esta materia en junio de

<sup>6</sup> En la medida que solo tenga carácter asesor y sus integrantes no perciban sueldo fiscal por su desempeño, no se requeriría necesariamente de una ley

<sup>7</sup> Boletín 9404-12

<sup>8</sup> De acuerdo al texto aprobado en general por el Senado del artículo 3 letra h) e i):

Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta cambios en su extensión, composición, estructura o función, conforme a criterios y umbrales que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza.

Ecosistema degradado: Ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento y estructura, causados por actividades o perturbaciones que son demasiado frecuentes o severos para permitir la regeneración natural o la recuperación



2014, y retirada la propuesta del Ex Presidente Piñera.

## PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

No cabe duda que el Ejecutivo debía reaccionar ante la catástrofe que significó en la presente temporada los incendios forestales. Las cifras son abrumadoras, pues entre julio de 2016 y febrero de 2017, se quemaron 586.000 hectáreas, que corresponde a diez veces el promedio, siendo la Región del Maule la más afectada. Los incendios afectan cada año en promedio a 50.000 hectáreas, generando según datos de la CORMA, pérdidas por sobre los US\$60 millones anuales.

Chile no cuenta con una ley que trate de forma integral la protección y prevención de incendios, pese a que CONAF estima que el 99% de los incendios son causados por el hombre, de los cuales un 34% de aquellos son provocados de forma intencional.

La Corporación protege alrededor de 37 millones de hectáreas, destinando recursos por 37 Millones US\$/año para proteger de incendios.

Ante esto, es sin duda necesario contar con una necesaria regulación, la que sin desconocer la forma como procede hoy la CONAF, debe propender a una mayor coordinación entre los Servicios e Instituciones que tienen competencia ante este tipo de emergencias.

Lo que hace el proyecto de ley en su Título VI, es establecer una especie de ley corta contra incendios, pero que no soluciona el problema de fondo.

Dispone que el Servicio debe elaborar planes regionales de protección contra incendios forestales, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional contra incendios forestales, con el fin de reducir tanto la ocurrencia, propagación y daños de éstos, como los costos asociados a su control. El contenido mínimo de estos planes considerará los objetivos, metas, medidas a adoptar en el territorio y las regulaciones que se establezcan para su cumplimiento. Estos planes podrán determinar áreas, franjas o radios que deberán mantenerse libres de material combustible, incluidas formaciones vegetacionales.

Sin embargo, nada se dice sobre cómo se compatibilizará la ejecución de ellos con el derecho de propiedad, ni qué ocurre en los casos en que esos terrenos estén ocupados por tomas ilegales o si se trata de predios fiscales o municipales.

Continúa señalando que en el caso que un mapa de prioridades de protección regional contra incendios forestales identifique zonas críticas desde el punto de vista de riesgo de incendios forestales, donde formaciones vegetacionales entren en contacto con sectores edificados o áreas urbanas, el Servicio podrá elaborar planes de prevención contra incendios forestales, cuyo cumplimiento será obligatorio, inclusive para los órganos del Estado, aplicándose en caso de infracción por parte del sujeto obligado, una multa a beneficio fiscal de entre 5 y 1.000 UTM.



A mayor abundamiento sobre este punto, la iniciativa propone la creación de las llamadas “zonas de interfaz urbano forestal”, que se definen como aquellas en las que una formación vegetal entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas, definidas por los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y/o Planes Reguladores o Seccionales. En caso de incendio forestal se consideran las zonas de interfaz como susceptibles de ser afectadas, y por lo tanto deberían ser objeto de protección, lo que es correcto. Pese a ello, esta figura que no estará exenta de incertidumbre, en atención a las facultades que tendrá el Servicio para ejecutar políticas y programas de protección contra incendios forestales, de forestación o restauración, tanto en formaciones vegetacionales, como en zonas de interfaz urbano forestal. Esto, pues si bien se quiere evitar catástrofes como las de Santa Olga, donde el fuego se propagó destruyendo la zona habitada, nada se dice sobre cómo se ejecutarán modificaciones con el fin de instaurar estas zonas en áreas que hoy están siendo utilizadas.

De acuerdo al Informe Financiero, la CONAF estima un número de 264 Planes para comunas críticas, los que tendrán un costo anual en régimen de un poco más \$654.000.000.- (Cada plan tendría un costo de \$2.400.000 aproximadamente). Si bien este es uno de los temas más relevantes que habrían motivado el impulso legislativo a esta iniciativa, y actualmente la CONAF desarrolla estos planes, el Ejecutivo deberá respaldar, en el debate, los recursos que serán destinados a la elaboración de dichos planes, como aquellos que se ejecutarán directamente en la prevención de incendios, ello, pues el mencionado informe sólo detalla el requerimiento de nuevos funcionarios, equipamiento individual y gastos indirectos, sin señalar en qué consiste este concepto.

El proyecto asume el tratamiento de esta materia desde la perspectiva del nuevo Servicio, debiendo en cambio, hacer intervenir, especialmente en materia de prevención, a otras autoridades como son las Municipalidades y, eventualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanización, y por supuesto los organismos de emergencias del Ministerio del Interior, como la ONEMI. En esta materia se esperaría una mayor complementación por parte de las autoridades relacionadas.

Lo preocupante, es lo discrecional que puede ser delegar a un Reglamento, que será dictado por los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, el procedimiento de elaboración, los contenidos de los planes y las disposiciones de éstos que se entenderán incorporadas a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y/o Planes Reguladores o Seccionales, desconociéndose la regulación específica que tendrán estos mismos.

En cuanto a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, preocupa su incorporación, pues es el Proyecto de Ley relativo al fortalecimiento de la Regionalización del país, Boletín N° 7963-06, el que está discutiendo su concepto y mandato, lo que podría tener efectos indeseados en cuanto a la rigidez en el uso del suelo y la correcta asignación de recursos, pues a través de estos, se entrega a las regiones la facultad de planificar el uso del territorio en forma restrictiva.

Una correcta regulación en la materia debiese avanzar hacia contemplar un marco normativo que abarque un escenario completo en virtud del cual se entiende que se desarrolla un evento de este tipo. Así, deberán entregarse herramientas para elaborar un correcto plan nacional de

protección contra incendios forestales, pero también e igual de relevante, su prevención. Para ello, debe considerarse la relevancia de educar a la población del país en la prevención de incendios forestales.

De la misma manera y a diferencia de lo que ocurre en este proyecto, se deben esclarecer las obligaciones de los propietarios de terrenos rurales y aéreas de interfaz urbano-rural, y las responsabilidades y conocimiento que se debe tener para el uso del fuego en terrenos rurales que se realice con fines agropecuarios y de silvicultura.

## EL SERVICIO Y RÉGIMEN DE PERSONAL

La iniciativa propone la creación de la nueva CONAF como un Servicio Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura. Se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales y estará adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, al igual que la propuesta del año 2011.

En lo orgánico, el personal seguirá estando regido por las normas del Código del Trabajo, con Escala Única de Sueldos, asignación de modernización y otras entregadas a los trabajadores, estarán afectos a la responsabilidad administrativa, sometidos a las normas de probidad y deberes

y prohibiciones, y además a evaluación de desempeño.

Este último aspecto, el relativo al régimen del personal, tiene un amplio tratamiento en el proyecto de ley. Se trata de un mecanismo híbrido, mezcla del Código del Trabajo y de normas del Estatuto Administrativo y de la Ley Orgánica Constitucional de la Administración del Estado. Si bien las normas del Código del Trabajo parecerían más flexibles frente a las del Estatuto Administrativo, lo que permitiría mirar como un antecedente positivo la aplicación de dicho Código, resulta de compleja aplicación en la esfera pública atendido lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política.

En efecto, en dicho precepto se ordena que una ley orgánica constitucional garantice la carrera funcionaria; frente a lo cual, el Código del Trabajo, que tiene rango común u ordinario, no garantiza una carrera funcionaria bajo ningún punto de vista. En el pasado alguna vez se sostuvo, acertadamente, que el Código del Trabajo podía servir como estatuto para los funcionarios de alguna repartición específica; pero ello, como se dijo, es complejo, ya que se opone al mandato constitucional del inciso primero del aludido artículo 38. Se trata de una garantía que en él se establece en los siguientes términos: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”. La ley laboral no está concebida para satisfacer ese mandato constitucional, pese a lo positivo que puede ser considerar este estatuto para los funcionarios públicos.

Este punto adquiere mayor relevancia desde que uno de los más difíciles aspectos que se deben solucionar en este proyecto, es la resistencia del personal de la actual CONAF, que desde el estudio y tramitación del mensaje que dio origen a la Ley 18.348, publicada en 1984, nunca ha estado de acuerdo con someterse al Estatuto Administrativo, y sobre todo, a la Escala Única de Remuneraciones del Sector Público, como se propone en el proyecto de ley que ahora se comenta.

Con todo, debe señalarse que el artículo tercero transitorio, al facultar al Presidente para establecer, mediante decreto con fuerza de ley, las plantas de personal y su adscripción a la Escala Única, garantiza que si hubiere una diferencia, que pudiera significar disminución de remuneraciones de los funcionarios respecto de la actual, dicha diferencia se pagará mediante una planilla suplementaria. Ello no bastaría, al parecer, para dar tranquilidad a los afectados; y en todo caso, el nuevo Servicio quedaría desde su creación en adelante sujeto a la Escala Única para los que ingresen con posterioridad.

Además, el artículo 12 establece que “el personal del Servicio estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento expedido por el Ministerio de Agricultura, el que, además, deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda.

Las evaluaciones servirán de base para la selección del personal a capacitar, el desarrollo de la carrera funcionaria, la remoción o el término del contrato de trabajo en su caso”.

Llama la atención en esta proposición que, si bien se hace mención a una “carrera funcionaria”,

no se sabe en qué consiste pues se entrega su desarrollo a un reglamento. Ello dista de cumplir que el requisito constitucional antes anotado, que garantiza la carrera funcionaria mediante normas de rango orgánico constitucional. Asimismo, en el artículo 20 se establece que “un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura contendrá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, para la promoción y para cualquiera otra finalidad con que éstos se realicen”. Ello, como se ha señalado, es una materia de ley, de rango orgánico constitucional y no de reglamento.

Junto con estar sometidos a la EUS, asignación de modernización y otras entregadas a los trabajadores, los trabajadores tendrán responsabilidad administrativa, y estarán sometidos a las normas de probidad y deberes y prohibiciones, pero surgen aprehensiones en cuanto a las capacidades de negociación colectiva que estos podrían tener en atención a su contratación vía Código del Trabajo.

## EL CONSEJO CONSULTIVO

El proyecto establece, en su artículo 5°, que corresponderá a un Consejo de carácter consultivo y ad honorem asesorar al Ministro de Agricultura en materias de carácter forestal, cuando éste así lo requiera. Asimismo, dicho Consejo podrá asesorar al Ministro de Agricultura

a fin que éste proponga la política forestal y sus instrumentos.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura fijará las normas para la creación de este Consejo; su conformación, que deberá ser representativa de los diversos sectores de la sociedad vinculados a materias forestales; causales de inhabilidad e incompatibilidades para integrarlo y su funcionamiento.

La creación de este Consejo en la forma propuesta genera más de una duda. Desde luego no queda claramente establecido si lo crea la ley, o si lo creará el reglamento que se ordena dictar. En efecto, se señala que “un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura fijará las normas para la creación de este Consejo”.

Un consejo meramente consultivo, que no ejerce por lo tanto potestades públicas, no requiere ser creado por ley y bastaría un decreto dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República. Corrobora lo anterior la falta de financiamiento fiscal, puesto que se declara expresamente que sus integrantes de desempeñarán ad honorem.

El proyecto, además de no resolver qué instancia creará el Consejo, entrega al reglamento materias tan relevantes como las causales de inhabilidad e incompatibilidades para integrarlo, materias que parecen formar parte de un estatuto orgánico de personal; tampoco se sabe el origen de sus miembros, si serán del sector público o del privado, y en ambos casos, las causales de inhabilidad e incompatibilidades incidirán en su libertad de trabajo, que no se puede regular por reglamento.

Desde otro punto de vista, la existencia de un consejo consultivo en materia forestal es un instrumento adecuado para el diseño de una política en la materia y para diversos aspectos del funcionamiento del sector, como se ha observado en el Consejo Consultivo de Política Forestal que ya existe<sup>9</sup>, creado por decreto<sup>10</sup> y sin funciones resolutivas.

Dicho Consejo de Política Forestal, fue creado como un organismo consultivo de carácter permanente del Ministro de Agricultura, cuya principal función es asesorar a dicha autoridad en materia forestal. En dicha calidad, le corresponde proponer al mencionado Ministro una política forestal chilena para el período 2015-2035; elaborar una propuesta referida a instrumentos de política forestal y sus eventuales modificaciones; identificar áreas de trabajo, proponiendo que éstas sean abordadas por el Consejo de Política Forestal, a través de la creación de comisiones o grupos de trabajos temáticos; sugerir formas de funcionamiento de las comisiones o grupos de trabajos temáticos para el tratamiento de asuntos que digan relación

9 Integrantes del Consejo de Política Forestal

Además del presidente del Consejo Aarón Cavieres, participan en esta instancia la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Claudia Carbonell; el director ejecutivo del Instituto Forestal (INFOR), Fernando Rosselot; la decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Carmen Luz De La Maza; el decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, Manuel Sánchez; el expresidente de la Sociedad de Botánica de Chile, Jorge Tomás Teillier; el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Fernando Raga; el presidente de la Asociación Gremial de la Pequeña y Mediana Empresa Maderera (Pymemad), Osvaldo Leiva; el presidente del Departamento de Pequeños y Medianos Propietarios Forestales (Propymefor), Fernando Dunn; el presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, Roberto Cornejo; el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (CTF), Jorge González; el consejero electo de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), Marcial Colín; el presidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (Muzech), Manuel Llao; la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona; y el vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso (<http://www.conaf.cl/gobierno-crea-consejo-de-politica-forestal/>).

10 Decreto Supremo N° 8, de 12 de marzo de 2015, del Ministerio de Agricultura.

Disponible en <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077189>.

con las funciones de competencia del Consejo; y, aprobar las actividades y planes de trabajo del Consejo que hayan sido presentados por el Presidente del Consejo.

Este Consejo ha efectuado un gran labor en el desempeño de las funciones encomendadas, logrando presentar el documento “Política Forestal 2015 – 2035”<sup>11</sup>. Por tanto, debiese ser aclarado el rol que este cumplirá en relación con aquel que propone el proyecto de ley, o de tratarse del mismo, efectuar esta aclaración, donde la iniciativa elevaría a rango legal su existencia.

## REMISIÓN A LOS REGLAMENTOS

El proyecto de ley contiene nueve remisiones a reglamentos, muchas de las cuales son objetables por dos razones: porque parecen asumir la redacción de los antiguos “reglamentos incorporados” que se dictaban bajo el imperio de la Constitución de 1925, y cuya constitucionalidad bajo la de 1980 no resulta aceptable; y en cuanto al fondo, porque varias de las normas reglamentarias o complementarias inciden directamente en aspectos propios de las regulaciones de los servicios públicos, cuya regulación básica o esencial, solo puede materializarse mediante normas de rango legal,

sin que sea posible establecer esas regulaciones mediante normas de nivel normativo inferior. Ello contraviene los artículos 38 y 65, inciso cuarto N°2, entre otros, de la Constitución Política.

Para comprender la aseveración precedente, conviene recordar que la Constitución de 1925 reconocía expresamente la potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la República (artículo 72, N° 2), pero la potestad reglamentaria autónoma debía deducirse de los artículos 60 y 71 que daban sustento jurídico a una facultad relativa a todo cuanto correspondiera al objeto de su autoridad gubernativa y ejecutiva. La potestad de ejecución versaba y versa sobre materias propias de ley, siempre que ésta las hubiere previamente regulado legalmente y que, adicionalmente, requirieran, para su correcta ejecución, de otras normas de nivel reglamentario. La potestad autónoma, en cambio, no versa ni puede versar sobre materias propias de ley, ni sobre materias que la Constitución de 1925 reservaba exclusivamente a la ley (artículo 44). Esta potestad reglamentaria autónoma, como se sabe, quedó consagrada expresamente en el artículo 32, N° 6, de la Constitución de 1980, en el mismo precepto relativo a la potestad reglamentaria de ejecución.

Ahora bien, la Constitución de 1980 precisó de mejor forma el ejercicio de facultades regulatorias por parte del Presidente de la República. Definió una potestad reglamentaria de ejecución, sobre las materias de competencia legal que requirieran, a juicio exclusivo del Presidente, de la dictación de normas complementarias para su mejor aplicación. Definió una potestad reglamentaria autónoma para que el Presidente regulara cualquier materia que no quedara comprendida en el dominio legal, y estableció un marco normativo expreso para la delegación de facultades legislativas por el

<sup>11</sup> Disponible en [http://www.conaf.cl/wp-content/files\\_mf/1462549405politicaforestal201520351.pdf](http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1462549405politicaforestal201520351.pdf)

Congreso al Presidente para la dictación de decretos con fuerza de ley (artículo 61, actual 64). Este marco normativo para el ejercicio de facultades delegadas excluye diversas materias, tales como las comprendidas en las garantías constitucionales (todo el artículo 19) o las que requieran de un quórum especial.

La norma de la Constitución de 1980, relativa a los decretos con fuerza de ley, que es precisa y que excluye en forma expresa de ciertas materias, no deja lugar a la dictación de reglamentos complementarios o incorporados a la ley por el Presidente de la República, en virtud de un mandato del legislador, en el entendido de que formarán parte del texto legal tramitado por el Congreso. Ello, por cuanto el marco constitucional no admite otro reglamento que el de ejecución de una ley o la dictación de un decreto con fuerza de ley, que requiere del ejercicio expreso, por parte del Poder Legislativo, de la facultad señalada

en el artículo 64. La Constitución de 1980 no admite una delegación como se entendió bajo el imperio de la Constitución de 1925, dado que ahora deberá señalar las “materias precisas” y porque del contexto fluye que se trata de textos expresos, autónomos (sin perjuicio de su marco delegatorio), cuya publicación, efectos y vigencia es la misma que para las demás leyes. No es admisible que dentro de un proyecto de ley, se introduzcan mandatos para que, dentro de plazo, el Presidente o un ministro en su representación, dicte un reglamento sobre materias complementarias, como es el caso del plazo que se establece en el inciso penúltimo del artículo séptimo transitorio del proyecto de ley. En el esquema constitucional actual, o bien el Presidente dicta un reglamento de ejecución cuando lo crea conveniente para la ejecución de la ley; o bien se le delegan facultades expresas para legislar en la forma indicada en el artículo 64 (DFL) ■■■



## VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

---

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Apruébase la siguiente ley que crea el Servicio Nacional Forestal:

### “Título I.

#### Naturaleza, objeto y funciones del Servicio Nacional Forestal

**Artículo 1.-** Créase el Servicio Nacional Forestal (en adelante “el Servicio”), como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio de Agricultura.

El domicilio del Servicio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de otros domicilios que pueda establecer en el país.

**Artículo 2.-** El Servicio tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas.

Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de los recursos señalados en el inciso anterior, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra incendios forestales.

De igual forma, velará por que el cumplimiento de su objeto se realice de manera equitativa e inclusiva en los territorios y ámbitos de acción del Servicio.

Las acciones de conservación de la biodiversidad que sean competencia especial de otro organismo no forman parte del objeto del Servicio, salvo en lo que respecta a la protección contra incendios forestales, cuyas labores de protección no abarcarán las tareas de restauración, las que serán responsabilidad del Servicio que las administre.

**Artículo 3.-** Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

- a) Formación vegetalacional: conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones.
- b) Incendio forestal: fuego que se propaga sin control, en cualquier tipo de terreno, afectando formaciones vegetacionales o zonas de interfaz urbano forestal.



- c) Protección contra incendios forestales: Acciones destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales a través de la prevención, monitoreo, detección, control y extinción de los incendios forestales, considerando la restauración de las áreas afectadas por éstos.
- d) Restauración: el proceso de ayuda al restablecimiento o recuperación de una formación vegetal que se ha degradado, dañado o destruido.
- e) Zonas de interfaz urbano forestal: zonas en las que una formación vegetal entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas, definidas por los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y/o Planes Reguladores o Seccionales.

En todo lo que no contradiga su objeto, el Servicio aplicará las definiciones contempladas en las leyes N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; el decreto ley N° 701, de 1974, cuyo texto fue sustituido por el decreto ley N° 2.565<sup>12</sup> y el decreto supremo N° 4.363, de 1931, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques.

**Artículo 4.-** Para el cumplimiento de su objeto, le corresponderán al Servicio las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Ejecutar las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la creación, conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, como también aquellas que incidan en la conservación de los componentes de la naturaleza asociados a éstas, la mantención del paisaje y los servicios ambientales que provean.
- b) Ejecutar las políticas y programas de protección contra incendios , deberá velar por la protección contra incendios forestales.

En el ejercicio de las funciones de protección contra incendios forestales, entre otras medidas, podrá:

- 1) Promover la participación ciudadana para lo cual podrá coordinarse con municipios, juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones de voluntariado, entre otros.
- 2) Acceder, de inmediato, a cualquier fuente de agua, natural o artificial, para el abastecimiento de aeronaves o equipos necesarios para el combate de incendios forestales. Quienes resulten perjudicados de modo directo por estas acciones podrán ser indemnizados por el Servicio, de conformidad a las reglas generales.
- 3) Elaborar mapas de prioridades de protección regional contra incendios forestales.
- 4) Elaborar planes regionales de protección contra incendios forestales y planes de prevención contra incendios forestales.
- c) Ejecutar o fomentar, según corresponda, la reforestación o restauración de las formaciones vegetacionales y de las zonas de interfaz urbano forestal dañadas por incendios forestales.
- d) Proponer al Ministro de Agricultura políticas destinadas a la conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país; a la protección contra incendios forestales, y a la reforestación o restauración forestal.

12 Ley de fomento forestal (bonificación)-

- e) Colaborar con el organismo competente en materia de sanidad vegetal, en la ejecución de programas que contribuyan a la prevención, detección y control de plagas forestales, enfermedades, agentes dañinos, y de otro tipo de amenazas que generen riesgos sobre las formaciones vegetacionales y sus ecosistemas asociados.
  - f) Ejecutar y promover programas de conocimiento científico, educación, divulgación, extensión, capacitación y asistencia técnica, sobre las materias objeto del Servicio. El Servicio podrá realizar estudios, por sí o a través de terceros, y divulgarlos.
  - g) Ejecutar programas de fomento e innovación de cadenas productivas y productos vinculados a las comunidades, pequeños y medianos propietarios forestales.
  - h) Desarrollar y mantener catastros e información actualizada sobre las materias de competencia del Servicio que sean determinadas por un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura.
  - i) Velar por la correcta aplicación de las leyes cuyo control corresponda al Servicio.
  - j) Fomentar la generación de bienes y servicios provenientes de las formaciones vegetacionales, coordinándose con los demás organismos competentes en la materia.
  - k) Colaborar en la formulación y ejecución de estrategias públicas destinadas a prevención, monitoreo, detección, control y extinción de incendios, la sustentabilidad del sector silvoagropecuario, la mitigación y adaptación al cambio climático, disminución de la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, y otros bienes y servicios que provean las formaciones vegetacionales y sus componentes naturales asociados.
  - l) Ejercer la calidad de autoridad administrativa, científica o de contraparte técnica en las convenciones internacionales que suscriba o ya suscritas por el Estado de Chile, en materias propias del objeto del Servicio, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura, según corresponda, en dichas materias.
  - m) Interponer querellas por los delitos cometidos en contra del personal del Servicio en el ejercicio de sus atribuciones.
  - n) Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de materias objeto de su competencia. Del mismo modo, el Servicio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas.
- Esta atribución sólo podrá ejercerse por resolución, debiendo obtener previamente la autorización de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda.
- En ningún caso el Servicio podrá caucionar compromisos u obligaciones contraídas por las entidades a cuya constitución o integración contribuya.
- ñ) Las demás funciones o atribuciones que la ley encomiende.

## Título II.

### Del Consejo Consultivo

**Artículo 5.-** Corresponderá a un Consejo de carácter consultivo y ad honorem asesorar al Ministro de Agricultura en materias de carácter forestal, cuando éste así lo requiera. Asimismo, dicho Consejo podrá asesorar al Ministro de Agricultura a fin que éste proponga la política forestal y sus instrumentos.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura fijará las normas para la creación de este Consejo; su conformación, que deberá ser representativa de los diversos sectores de la sociedad vinculados a materias forestales; causales de inhabilidad e incompatibilidades para integrarlo y su funcionamiento.

## Título III.

### De la Organización del Servicio

**Artículo 6.-** La dirección y administración superior del Servicio le corresponderá a su Director o Directora Nacional. El Servicio contará, asimismo, con un Subdirector o Subdirectora que subrogará al Director o Directora y cumplirá las demás tareas que éste o ésta le delegue.

El Servicio se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales. Corresponderá a los y las Directores y Directoras Regionales dirigir y ejercer las funciones del Servicio en la región y asesorar, en el ámbito de sus competencias, al delegado presidencial regional y a la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura respectiva.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley N° 19.882.

**Artículo 7.-** Corresponderá al Director o Directora Nacional:

- a) Dirigir el Servicio, fijar sus políticas generales y programas técnicos y sus modificaciones.
- b) Administrar y disponer de los bienes y recursos del Servicio, pudiendo al efecto, ejecutar toda clase de actos jurídicos a cualquier título.
- c) Aceptar donaciones, legados y herencias, estas últimas con beneficio de inventario, a favor del Servicio, las cuales estarán exentas del trámite de insinuación, a que se refiere el artículo 1401<sup>13</sup> del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones.

13 Se entiende por insinuación la autorización de juez competente, solicitada por el donante o donatario. El juez autorizará las donaciones en que no se contravenga a ninguna disposición legal.

- d) Acordar transacciones judiciales o extrajudiciales, convenios a que se refiere la ley N° 20.720<sup>14</sup> o aquella que la reemplace y someter asuntos en que tenga interés el Servicio a compromisos.
- e) Proponer el proyecto de presupuesto anual del Servicio y presentarlo al Ministerio de Agricultura para su consideración.
- f) Suscribir los contratos de trabajo y sus modificaciones y poner término a los mismos, delegar en el personal del Servicio las funciones y atribuciones que estime convenientes, adscribirlos en los estamentos que corresponda y designar a quienes tendrán el carácter de ministros de fe para el ejercicio de sus labores.
- g) Celebrar acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, sobre materias de su competencia.
- h) Decidir sobre la participación del Servicio en personas jurídicas de derecho público o privado que tengan objetivos similares o relacionados con los de aquél, y determinar los aportes que correspondan, en cuyo caso, de requerirse, deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda.
- i) Ordenar, por resolución fundada, trabajos extraordinarios en labores propias del Servicio, en horarios que excedan la jornada ordinaria de los trabajadores o en días sábado, domingo y festivos, por motivo de fuerza mayor o del cumplimiento de tareas imprescindibles e impostergables.
- j) Establecer mediante resolución fundada, la estructura orgánica del Servicio y crear las dependencias, unidades funcionales y sedes territoriales necesarias para garantizar la cobertura nacional y el cumplimiento de funciones y atribuciones del Servicio, de conformidad a las normas establecidas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- k) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley.

## Título IV.

### Del Personal

**Artículo 8.-** El personal se regirá por las normas del Código del Trabajo, por las disposiciones del decreto ley N°249<sup>15</sup>, de 1974 y las especiales de la presente ley.

En materia de remuneraciones se regirá por el referido decreto ley y su legislación complementaria incluida la asignación de modernización de los artículos 1 al 8 de la ley N° 19.553 y las asignaciones de los artículos 1 y 3 de la ley N° 20.300<sup>16</sup>, en los casos en que correspondan.

<sup>14</sup> SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO (Diario Oficial de 9 de enero de 2014).

<sup>15</sup> Escala Única de Sueldos del Sector Público.

<sup>16</sup> REFUERZA LOS ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (Diario Oficial de 23 de octubre de 2008): asignación de estímulo a la eficiencia institucional y asignación especial.a

**Artículo 9.-** Los trabajadores y trabajadoras que, por razones del buen funcionamiento del Servicio, deban cumplir funciones en lugares apartados de centros urbanos o zonas que impliquen riesgo o aislamiento, y aquellos que deban cumplir funciones de riesgo podrán regirse por una jornada de trabajo diferente a la indicada en el artículo 21<sup>17</sup> del decreto ley N° 249 de 1974, en lo relativo a la distribución horaria. Una resolución dictada por el Director o Directora Nacional del Servicio regulará la flexibilidad en la jornada diaria y semanal, considerando debidamente el descanso compensatorio de los días festivos y feriados.

Además, los trabajadores y trabajadoras señalados en el inciso anterior, podrán pactar una jornada bisemanal de trabajo en las condiciones indicadas en el artículo 39<sup>18</sup> del Código del Trabajo.

**Artículo 10.-** El personal del Servicio estará sujeto a las normas de probidad y los deberes y prohibiciones establecidos en el título III<sup>19</sup> del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en el título II<sup>20</sup> de la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiese afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Le serán también aplicables las normas contenidas en los artículos 61<sup>21</sup>

17 ARTÍCULO 21° Fijase, para todo el personal de las Instituciones, Servicios y organismos señalados en el artículo 1° de este decreto ley, una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

En casos justificados por razones de servicio, calificados por las autoridades respectivas, podrá nombrarse o contratarse profesionales o técnicos con jornadas de 22 ó 33 horas semanales. Los trabajadores sujetos a estas jornadas percibirán el 50% o el 75%, respectivamente, de las remuneraciones asignadas a la jornada completa correspondiente.

La fijación de jornadas de profesionales o técnicos con menos de 22 horas semanales, sólo podrá hacerse por decreto supremo del Ministerio respectivo con la visación de Hacienda, a petición fundada del Jefe Superior. En el mismo decreto se fijará la proporción del sueldo que corresponda percibir al trabajador.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la fijación de jornadas de profesionales o técnicos con menos de 22 horas semanales, respecto de las Municipalidades, se hará por el Alcalde respectivo. En el mismo decreto alcaldicio se fijará la proporción del sueldo que corresponda recibir al trabajador.

18 Art. 39. En los casos en que la prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los días de descanso compensatorios de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho período bisemanal, aumentados en uno.

19 TÍTULO III De la probidad administrativa; comprende: Párrafo 1° Reglas generales; Párrafo 2° De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas; Párrafo 3° De la declaración de intereses y de patrimonio, y Párrafo 4° De la responsabilidad y de las sanciones.

20 TÍTULO II De la declaración de intereses y patrimonio.

21 Artículo 61.- Serán obligaciones de cada funcionario:

- a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación;
- b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan;
- c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución;
- d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico;
- e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente;
- f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico;
- g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado;
- h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;
- i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo;
- j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos;
- k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley N° 18.575.
- l) Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría

y 90 A<sup>22</sup> del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

**Artículo 11.-** El personal del Servicio que se contrate con duración indefinida, se seleccionará mediante concurso público.

Excepcionalmente, por resolución fundada del Director Nacional, se podrán utilizar concursos internos de promoción, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del postulante.

Al Director o Directora Nacional, o a quien le deleguen facultades, de conformidad al inciso final del artículo 41<sup>23</sup> del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, que fija el texto, refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, le corresponderá suscribir los contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución.

La contratación del personal que se desempeñe en el Servicio deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario respectivo.

**Artículo 12.-** El personal del Servicio estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento expedido por el Ministerio de Agricultura, el que, además, deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda.

Las evaluaciones servirán de base para la selección del personal a capacitar, el desarrollo de la carrera funcionaria, la remoción o el término del contrato de trabajo en su caso.

---

m) J General de la República, y  
ustificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad, dentro del plazo que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso.

- 22 Artículo 90 A.- Los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra k) del artículo 61 tendrán los siguientes derechos:
- a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.
  - b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra precedente.
  - c) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere, registrará su última calificación para todos los efectos legales.
- Aceptada la denuncia por una autoridad competente, la formulación de ella ante otras autoridades no dará origen a la protección que establece este artículo.
- 23 Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes:
- a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;
  - b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes;
  - c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda;
- d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización; y
- e) La delegación será esencialmente revocable.
- El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación. Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas.
- Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada.

**Artículo 13.-** El Director o Directora Nacional del Servicio, sin perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78<sup>24</sup> del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda, o el texto que lo reemplace.

Igualmente podrán, en los casos que fuere procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el párrafo 4<sup>25</sup> del título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

**Artículo 14.-** Para efectos de la adecuada aplicación de las normas sobre capacitación, previstas en los artículos 179 y siguientes<sup>26</sup> del Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente mediante resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos que para estos efectos contemple la Ley de Presupuestos.

**Artículo 15.-** El personal del Servicio tendrá derecho a afiliarse a servicios de bienestar, en los casos y condiciones que establezca el reglamento. El Servicio efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario o funcionaria, sin sobrepasar el máximo legal de los mismos.

**Artículo 16.-** La responsabilidad disciplinaria del personal del Servicio por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes<sup>27</sup> del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

**Artículo 17.-** Las infracciones de los deberes y prohibiciones establecidos en el título III de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado o en el respectivo contrato de trabajo en que incurra el personal del Servicio, serán sancionadas con alguna de las siguientes medidas:

- a) Censura.
- b) Multa.
- c) Remoción.

Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito

24 Véase el ANEXO I.

25 Véase el ANEXO II

26 Título VI DE LA CAPACITACION OCUPACIONAL (arts.179 a 183 bis).

27 Sobre el sumario administrativo (artículos 126 a 145).



de los antecedentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículo 121 y siguientes<sup>28</sup> del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

La remoción es la decisión de la autoridad facultada para contratar, de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 160<sup>29</sup> del Código del Trabajo.

Las infracciones a la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, serán sancionadas de acuerdo a las reglas establecidas en dicha ley.

**Artículo 18.-** Sin perjuicio de las causales previstas en los artículos 159<sup>30</sup> y siguientes del Código del Trabajo, y en el inciso final del artículo anterior de esta ley, la relación laboral del personal del Servicio podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su desempeño.

28 Medidas disciplinarias (artículos 121 a 125).

29 Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

- 1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
  - a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
  - b) Conductas de acoso sexual;
  - c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
  - d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
  - e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
  - f) Conductas de acoso laboral.
- 2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
- 3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
- 4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
  - a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
  - b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.
- 5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
- 6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
- 7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

30 Art. 159. El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:

- 1.- Mutuo acuerdo de las partes.
- 2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos.
- 3.- Muerte del trabajador.
- 4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año.

El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida.

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años.

El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo.

- 5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
- 6.- Caso fortuito o fuerza mayor.

Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161<sup>31</sup> del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director Nacional del Servicio, o a quien éste le delegue funciones, y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio.

No se podrá pactar el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los artículos 161, 162<sup>32</sup> y 163<sup>33</sup> del Código del Trabajo, y en caso alguno se podrá alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas. En ningún caso se podrá convenir, individual o colectivamente, indemnizaciones cuyo límite máximo exceda aquel establecido

31 Art. 161. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168.

En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos.

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.

32 Art. 162. Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda.

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles.

Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. Las Inspecciones del Trabajo, tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos treinta días hábiles.

Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pague al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada. La comunicación al trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda.

Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que establece el artículo 506 de este Código.

La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, estará especialmente facultada para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del despido, en los casos a que se refieren los incisos precedentes. Asimismo, estará facultada para exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las infracciones a este inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM.

33 Art. 163. Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente.

A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración.

La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará en el caso de terminación del contrato de los trabajadores de casa particular, respecto de los cuales regirán las siguientes normas:

Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que origine la terminación del contrato, a una indemnización a todo evento que se financiará con un aporte del empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible, la que se regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de los artículos 165 y 166 de este Código, y b) La obligación de efectuar el aporte tendrá una duración de once años en relación con cada trabajador, plazo que se contará desde el 1º de enero de 1991, o desde la fecha de inicio de la relación laboral, si ésta fuere posterior. El monto de la indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al período respectivo, más la rentabilidad que se haya obtenido de ellos.

en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, salvo que estas indemnizaciones hayan sido pactadas hasta el 15 de enero de 1986.

**Artículo 19.-** Una resolución dictada por el Servicio, visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, establecerá en forma anual la estructura de la dotación de trabajadores del Servicio, indicando el número máximo de trabajadores que podrá ocupar cada estamento y grado correspondiente de la escala única de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974.

**Artículo 20.-** Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura contendrá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, para la promoción y para cualquiera otra finalidad con que éstos se realicen.

## Título V.

### Del Patrimonio

**Artículo 21.-** El patrimonio del Servicio estará constituido por:

- a) Los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos para el Sector Público.
- b) Los recursos otorgados por leyes especiales.
- c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, que se le transfieran o adquieran a cualquier título.
- d) Las donaciones que se le hagan, así como las herencias o legados que acepte. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de trámite de insinuación, a que se refiere el artículo 1401<sup>34</sup> del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones.
- e) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.
- f) Los demás aportes que perciba en conformidad a la ley.

El Servicio estará sujeto a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánica de Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias.

---

34 Véase nota al artículo 7°, letra c).

## Título VI.

### De la protección contra incendios forestales

**Artículo 22.-** El Servicio deberá elaborar planes regionales de protección contra incendios forestales, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional contra incendios forestales, con el fin de reducir tanto la ocurrencia, propagación y daños de éstos, como los costos asociados a su control. El contenido mínimo de estos planes considerará los objetivos, metas, medidas a adoptar en el territorio y las regulaciones que se establezcan para su cumplimiento. Estos planes podrán determinar áreas, franjas o radios que deberán mantenerse libres de material combustible, incluidas formaciones vegetacionales.

En el caso que un mapa de prioridades de protección regional contra incendios forestales identifique zonas críticas desde el punto de vista de riesgo de incendios forestales, donde formaciones vegetacionales entren en contacto con sectores edificados o áreas urbanas, el Servicio podrá elaborar planes de prevención contra incendios forestales, cuyo cumplimiento será obligatorio, inclusive para los órganos del Estado, aplicándose en caso de infracción por parte del sujeto obligado, una multa a beneficio fiscal de entre 5 y 1.000 unidades tributarias mensuales, conforme al procedimiento dispuesto en los artículos 45 y siguientes<sup>35</sup> de la ley N°20.283.

Para la determinación de la sanción específica que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

- a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.
- b) El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción.
- c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.
- d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.
- e) La conducta anterior del infractor.
- f) La capacidad económica del infractor.
- h) El detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado.
- i) Todo otro criterio que sea relevante para la determinación de la sanción.

Un reglamento de los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo determinará el procedimiento de elaboración, los contenidos de los planes señalados en este artículo y las disposiciones de éstos que se entenderán incorporadas a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y/o Planes Reguladores o Seccionales.

**Artículo 23.-** Los planes de manejo que deban presentarse conforme a la legislación forestal vigente deberán incorporar técnicas de silvicultura preventiva, con el objeto de disminuir la propagación de incendios forestales.

35 TÍTULO VII Del procedimiento y las sanciones (arts. 45 a 56).

Asimismo, será obligación del propietario de las plantaciones forestales, que se establezcan o que se repongan y sujetas o no a los mecanismos que han operado para su fomento, ordenar éstas, con el fin de disminuir la continuidad de combustible.

El incumplimiento a las normas a que se refiere este artículo, hará incurrir al propietario o interesado en las sanciones dispuestas en el artículo 54 letra a)<sup>36</sup> de la ley N° 20.283.

El Ministerio de Agricultura dictará un reglamento que contendrá las demás normas necesarias para la aplicación de este artículo.

**Artículo 24.-** Las intervenciones en áreas, franjas o radios a que se refiere este título, en que existan especies vegetales clasificadas según estado de conservación, se efectuarán de conformidad al reglamento que conjuntamente dicten los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente.

**Artículo 25.-** En caso de emergencias forestales cuya entidad no permita abordarlas eficaz y eficientemente con las atribuciones establecidas en título II de la presente ley y dentro del marco de las competencias legales del Servicio, declaradas mediante decreto fundado dictado por el Ministro de Agricultura, expedido “por Orden del Presidente de la República”, el Director Nacional podrá disponer la celebración de tratos o contrataciones directas para la provisión de bienes y servicios con el objeto de abordar la emergencia y por el tiempo necesario para dar respuesta a la emergencia decretada. Asimismo, podrá contratar trabajadores por el tiempo que permita atender adecuadamente la emergencia, a quienes les será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 152 bis<sup>37</sup> del Código del Trabajo, pudiendo exceder temporalmente las dotaciones máximas autorizadas en la Ley de Presupuestos.

Todos los actos administrativos que se dicten de conformidad al presente artículo podrán cumplirse antes de efectuarse la toma de razón cuando proceda, siempre que se trate de medidas que perderían su oportunidad si no se ejecutaren de inmediato. En tales circunstancias, la Dirección Nacional deberá remitir a la Contraloría General de la República los respectivos actos administrativos, a más tardar dentro del plazo de sesenta días de dictado el acto. Asimismo, deberá remitir copia de dichos actos a la Dirección de Presupuestos junto a un informe que detalle el monto de recursos utilizados para dicho fin y la rendición documentada de éstos.

La Dirección Nacional deberá comunicar a la Oficina Nacional de Emergencia el estado de las emergencias, su nivel de peligrosidad, alcance y amplitud de las mismas, en la forma que determinen los protocolos generados para estos efectos. Asimismo, la Dirección Nacional deberá actuar en coordinación con el organismo competente para la planificación, dirección, y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta a la emergencia.

---

36 Artículo 54.- Establécense las siguientes sanciones para las infracciones que se señalan a continuación:

a) incumplimiento de las actividades de protección, con multa de 5 a 15 unidades tributarias mensuales por hectárea incumplida, de acuerdo a las prescripciones contenidas en el plan de manejo;

37 Art. 152 bis.- Tratándose de los trabajadores de los Cuerpos de Bomberos que vivan en dependencias de su empleador, les será aplicable la norma contenida en el inciso segundo del artículo 149 de este Código.

El descanso entre jornadas diarias podrá ser interrumpido cuando estos trabajadores deban concurrir a un acto de servicio o emergencia relacionado con sus funciones, debiendo el empleador compensar adecuadamente ese lapso otorgando un tiempo de descanso en la jornada diaria siguiente.

Tratándose de los cuarteleros conductores de los Cuerpos de Bomberos que no vivan en dependencias de su empleador, su jornada de trabajo no podrá exceder de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esa jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella. Con todo, dicho descanso podrá ser interrumpido en los mismos casos y bajo las mismas condiciones previstas en el inciso anterior.

En el caso que la emergencia corresponda a uno o varios incendios forestales, sin perjuicio de la coordinación dispuesta en el inciso anterior, la dirección técnica de las labores tanto de planificación, como operativas de combate y control de los mismos, corresponderá al Servicio.”.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la siguiente forma:

1. Agrégase en el literal c) del artículo 35, a continuación de la expresión “desarrollo prioritario”, la expresión “, de riesgo y restricción”<sup>38</sup>.
2. Agrégase en el literal d) del artículo 42 a continuación de la expresión “prioritarias de desarrollo urbano” la expresión “, de riesgo y restricción”<sup>39</sup>.
3. Modifícase el artículo 60 en el siguiente sentido:
  - a) Reemplázase la expresión “El Plan Regulador señalará los terrenos”, por la siguiente: “El Plan Regional de Ordenamiento Territorial y/o Plan Regulador o Plan Seccional señalarán terrenos afectados por riesgos”.
  - b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo:
 

“Adicionalmente, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y/o Plan Regulador o Seccional incorporará, cuando corresponda, las áreas, franjas o radios de restricción, relativos a:

    - Infraestructura, tales como aeropuertos, helipuertos, oleoductos, gaseoductos, líneas de alta tensión, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.
    - Instalaciones o actividades peligrosas.
    - Zonas de interfaz urbano forestal previo informe favorable del Servicio Nacional Forestal, pudiendo establecer en ellas obligaciones o limitaciones a las actividades que se localicen, con el objeto de prevenir la generación o propagación de incendios forestales.”<sup>40</sup>.
4. Reemplázase en el literal i) del artículo 105 la frase que va desde la expresión “Características de diseño”, hasta “definidas en los planes reguladores”, por la siguiente: “Características de diseño, materialidad, resistencia estructural

38 La letra c) quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 35°.- El Plan Regulador Intercomunal estará compuesto de:

c) Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, de riesgo y restricción, límites de extensión urbana, densidades, etc.

39 La letra d) quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 42°.- El Plan Regulador Comunal estará compuesto de:

d) Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, de riesgo y restricción, etc.

40 El artículo 60 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 60°.- El Plan Regional de Ordenamiento Territorial y/o Plan Regulador o Plan Seccional señalarán terrenos afectados por riesgos que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables. Estos terrenos no podrán subdividirse y sólo se aceptará en ellos la ubicación de actividades transitorias, manteniéndose las características rústicas del predio. Entre ellos se incluirán, cuando corresponda, las áreas de restricción de los aeropuertos.

[Nuevo inciso segundo]

Igualmente, el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente.

y seguridad, para las edificaciones que se puedan emplazar en las áreas de riesgo y áreas de restricción incluidas en los planes reguladores y planes seccionales”<sup>41</sup>.

**ARTÍCULO TERCERO<sup>42</sup>.**- Introdúcense las siguientes modificaciones de adecuación en los textos legales que se indican:

1. En el Decreto N° 4.363, de 1931, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques:
  - a) Reemplázase en el artículo 2 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - b) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 10 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
2. En la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal:
  - a) Sustitúyese el numeral 8 del artículo 2, por el siguiente: “8) Servicio: el Servicio Nacional Forestal” y reemplázase en su número 12 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - b) Reemplázase en el artículo 4 la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
  - c) Reemplázase en el artículo 5 las frases “la Corporación” por “el Servicio” y “de la Corporación” por “del Servicio”.
  - d) Reemplázase en el inciso primero del artículo 8 la expresión “a la Corporación, ésta” por “al Servicio, éste”; en su inciso segundo la expresión “la Corporación” por “el Servicio”; en su inciso tercero la frase “La Corporación” por “El Servicio”; en su inciso cuarto “la Corporación” por “el Servicio” y en su inciso quinto la frases “a la Corporación” por “al Servicio” y “la Corporación” por “el Servicio”.
  - e) Reemplázase en el artículo 9 la palabra “La Corporación” por “El Servicio”.
  - f) Reemplázase en los incisos primero y final del artículo 10 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - g) Reemplázase en el inciso primero del artículo 11 la frase “La Corporación” por “El Servicio” y la frase “a la Corporación” por “al Servicio”.
  - h) Reemplázase en el inciso primero del artículo 12 la frase “La Corporación” por “El Servicio” y en su inciso cuarto la frase “a la Corporación” por “al Servicio”.
  - i) Reemplázase en el inciso primero del artículo 13 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en su inciso final “la Corporación” por “el Servicio”<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Letra i) quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 105°.- El diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los standard que establezca la Ordenanza General en lo relativo a:

i) Características de diseño, materialidad, resistencia estructural y seguridad, para las edificaciones que se puedan emplazar en las áreas de riesgo y áreas de restricción incluidas en los planes reguladores y planes seccionales. y, en el caso de urbanizaciones que se emplacen en tales áreas, las características de las obras de urbanización destinadas a mitigar los riesgos y facilitar la evacuación hacia zonas seguras o servir, cuando corresponda, como alternativa para el escurrimiento de las aguas.

<sup>42</sup> Las modificaciones que se introducen en los textos legales comprendidos en el artículo tercero, solo consisten en adecuaciones de la nomenclatura (se sustituye Corporación Nacional forestal por Servicio Nacional Forestal).

<sup>43</sup> Inciso que se suprime:

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, facúltase a la Corporación Nacional Forestal para que, durante los años 2009 y 2010, pueda modificar en el transcurso



- j) Reemplázase en el artículo 14 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
- k) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 19 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en sus incisos tercero y quinto la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
- l) Reemplázase en el artículo 20 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
- m) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 22 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en su inciso final la frase “la Corporación” por “al Servicio”.
- n) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 29 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
- ñ) Reemplázase en el artículo 31 la frase “la Corporación Nacional Forestal” por “el Servicio”.
- o) Reemplázase en la letra j) del artículo 33 la frase “El Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal” por “El Director Nacional del Servicio Nacional Forestal”.
- p) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 34 la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
- q) Reemplázase en los incisos séptimo y noveno del artículo 35 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y en su inciso octavo la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
- r) Reemplázase en el artículo 37 la frase “a la Corporación” por “al Servicio”.
- s) Reemplázase en el inciso primero, cuarto y quinto del artículo 38 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y, en su inciso primero, la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
- t) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 40 la frase “a la Corporación” por “al Servicio”.
- u) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 41 la frase “Director Ejecutivo de la Corporación” por “Director Nacional del Servicio Nacional Forestal” y en su inciso final la expresión “Director Ejecutivo” por “Director Nacional”.
- v) Reemplázase en el inciso primero del artículo 45 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en su inciso cuarto la expresión “La Corporación estará facultada” por “El Servicio estará facultado”.
- w) Reemplázase en el inciso primero y segundo del artículo 46 la expresión “de la Corporación” por “del Servicio”.
- x) Reemplázase en los incisos primero y tercero del artículo 47 la frase “la Corporación” por “el Servicio”, las tres veces que aparece y en el inciso segundo la frase “de la Corporación” por “del Servicio”.
- y) Reemplázase en el inciso final del artículo 49 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
- z) Reemplázase en el inciso final del artículo 50 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - aa) Reemplázase en el inciso final del artículo 51 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - bb) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 52 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y en su inciso tercero la expresión “a la Corporación” por “al Servicio”.
  - cc) Reemplázase en los literales d) y e) del artículo 54 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.

---

de dichos años el valor de los costos de las actividades bonificables fijados para cada temporada. Dichas modificaciones deberán contar siempre con la aprobación previa de los Ministerios de Agricultura y Hacienda.

- dd) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 56 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - ee) Reemplázase en el artículo 57 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - ff) Reemplázase en el artículo 58 la frase “la Corporación” por “el Servicio” las tres veces que aparece.
  - gg) Reemplázase en el artículo 60 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - hh) Reemplázase en el artículo 64 la frase “a la Corporación Nacional Forestal o a su Director Ejecutivo,” por la siguiente: “al Servicio Nacional Forestal o a su Director Nacional”.
3. En el Decreto ley N° 701, de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala, cuyo texto fue sustituido por el Decreto ley N° 2.565:
- a) Al artículo 2:
    - i) Sustitúyese la frase “CORPORACION: La Corporación Nacional Forestal.”, por la siguiente: “SERVICIO: El Servicio Nacional Forestal.”
    - ii) Reemplázase en la definición de “Corta no autorizada”, la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - b) Reemplázase en los incisos primero y segundo del artículo 4 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y en sus incisos segundo y tercero la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
  - c) Reemplázase en el artículo 5 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - d) Reemplázase en el inciso primero del artículo 7 la frase “La Corporación” por “El Servicio”, la expresión “la misma Corporación” por “el mismo Servicio” y en su inciso segundo la frase “de la Corporación” por “del Servicio”.
  - e) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y en el inciso final la expresión “de la Corporación” por “del Servicio”.
  - f) Reemplázase en el artículo 9 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - g) Reemplázase en el inciso primero del artículo 10 la frase “La Corporación” por “El Servicio” y en su inciso segundo la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - h) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 13 la frase “La Corporación” por “El Servicio” y en su inciso quinto la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - i) Reemplázase en los incisos primero y segundo del artículo 15 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y suprimase su inciso final.
  - j) Reemplázase en el inciso primero del artículo 16 la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en su inciso segundo la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - k) Reemplázase en los incisos primero, segundo cuarto, sexto y séptimo parte final del artículo 21 la frase “la Corporación” por “el Servicio” y sustitúyase en su inciso séptimo la expresión “, además a la Corporación” por “al Servicio”.
  - l) Reemplázase en el artículo 22 la frase “la Corporación” por “el Servicio”, las tres veces que aparece.
  - m) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 23 la frase “a la Corporación” por “al Servicio”.
  - n) Reemplázase en el inciso primero del artículo 24 la frase “de la Corporación” por “del Servicio”.

- ñ) Reemplázase en el artículo 24 bis la frase “de la Corporación” por “del Servicio” las dos veces que aparece.
  - o) Reemplázase en el inciso primero del artículo 24 bis B) la frase “de la Corporación” por “del Servicio” y en su inciso segundo la frase “la Corporación” por “el Servicio” las dos veces que aparece.
  - p) Reemplázase en el artículo 25 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - q) Reemplázase en el artículo 27 la frase “la Corporación” por “el Servicio”.
  - r) Reemplázase en el artículo 29 la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
  - s) Reemplázase en el inciso tercero del artículo 30 la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
  - t) Reemplázase en el artículo 31 la frase “La Corporación” por “El Servicio”.
  - u) Reemplázase en el inciso primero del artículo 36 la frase “La Corporación” por “El Servicio” y la frase “de la referida Corporación” por “del referido Servicio”.
4. Reemplázase en el N° 43 del artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito la frase “de la Corporación” por “del Servicio”.
  5. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 8 de la ley N° 18.287 que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local la frase “de la Corporación” por “del Servicio”, las dos veces que aparece.
  6. En la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:
    - a) Reemplázase en el artículo 35 las frases “La Corporación Nacional Forestal” por “El Servicio Nacional Forestal”.
    - b) Reemplázase en el número 4 del artículo 67 la frase “la Corporación” por “el Servicio Nacional Forestal”.
    - c) Reemplázase en el inciso primero del artículo 68 la frase “de la Corporación” por “del Servicio Nacional Forestal”.

## ARTÍCULOS TRANSITORIOS

**Artículo primero transitorio.-** El Servicio será, para todos los efectos, el continuador y sucesor legal de la Corporación Nacional Forestal. Todas las menciones a la Corporación Nacional Forestal que se contengan en leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, oficios, circulares, actos, contratos o convenios, se entenderán efectuadas al Servicio que se crea por esta ley.

**Artículo segundo transitorio.-** De acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, se entenderán traspasados, por el solo ministerio de la ley, al Servicio Nacional Forestal todos los bienes pertenecientes y derechos que correspondan a la Corporación Nacional Forestal, así como todas las obligaciones que ésta haya asumido en virtud de cualquier acto y contrato que hubiere celebrado.

Respecto de los inmuebles inscritos a nombre de la Corporación Nacional Forestal, por resolución de la Dirección Nacional del Servicio, los Conservadores de Bienes Raíces respectivos practicarán, en cada caso, a título gratuito, una subinscripción al margen de la respectiva inscripción de dominio, en la que se dejará constancia de que el inmueble de que se trate ha pasado al dominio del Servicio en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y por el solo ministerio de la ley.

En todo caso, los Conservadores de Bienes Raíces, de oficio, efectuarán dicha anotación cuando deban practicar cualquier inscripción relativa a los inmuebles del Servicio, también a título gratuito.

**Artículo tercero transitorio.-** Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Agricultura, suscritos por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para:

- 1) Fijar la planta de Directivos del Servicio, pudiendo al efecto fijar el número de cargos, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que se encuentren afectos al título VI de la ley N° 19.882, y el grado de la escala única de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, asignado a cada uno de esos cargos.

Las personas que a la fecha de publicación de la presente ley se desempeñen en la Corporación Nacional Forestal como titulares en los cargos de Director Ejecutivo, Secretario Ejecutivo, Director Regional, Gerente de Desarrollo y Fomento Forestal, Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Gerente de Protección contra Incendios Forestales, Gerente de Finanzas y Administración, Gerente de Desarrollo de las Personas, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas, Jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Jefe de Secretaría de Política Forestal, Fiscal y Jefe de la Unidad de Auditoría Interna continuarán ejerciendo dichos cargos en el Servicio y percibiendo, en caso que corresponda, la asignación que contempla el artículo 4 de la ley N° 20.300, hasta que se proceda a la designación del equipo de dirección y administración del Servicio, de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley N° 19.882.

- 2) Fijar los grados de la Escala Única de Sueldos, iniciales y superiores, de los demás estamentos de personal del Servicio.
- 3) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso del personal de la Corporación Nacional Forestal al Servicio Nacional Forestal, fijando el número de personal a traspasar y el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos, expedidos bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Agricultura, el que señalará la época en que se hará efectivo el traspaso de acuerdo a lo señalado anteriormente.

- 4) El uso de las facultades señaladas en el numeral 3) quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal que afecte:
  - a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
  - b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
  - c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma impositibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.
  - d) El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tenga reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
  - e) El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado por causa que otorgue derecho a percibirlo. En tal caso la indemnización se determinará computando el tiempo servido en la Corporación Nacional Forestal. Además se computará el tiempo trabajado en el Servicio que crea la presente ley.
- 5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta que fije. Igualmente fijará la dotación máxima de personal del Servicio. También establecerá la fecha en que dicho Servicio entrará en funcionamiento.
- 6) A los funcionarios que sean traspasados desde la Corporación Nacional Forestal al Servicio, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del presente artículo, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley, debiendo regirse en dichas materias por las normas que se encontraban vigentes en la mencionada Corporación al momento del traspaso.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, los mencionados trabajadores podrán someterse de manera voluntaria e irrevocable a la regulación de dicho artículo, de lo que se deberá dejar constancia en el respectivo contrato de trabajo.
- 7) Crear una asignación especial para el personal que desempeñe labores de guardaparques, en condiciones de aislamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la presente ley; pudiendo al efecto, fijar las condiciones para su otorgamiento, percepción, pago, extinción y cualquier otra norma necesaria para la adecuada aplicación de la misma.

**Artículo cuarto transitorio.-** En tanto el Servicio no confeccione el Reglamento interno a que se refiere el título III del Código del Trabajo, se aplicará a su personal el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Nacional Forestal vigente a la fecha de publicación de la presente ley.

**Artículo quinto transitorio.-** Los extrabajadores jubilados y extrabajadoras jubiladas de la Corporación Nacional Forestal mantendrán su derecho a afiliarse al Servicio de Bienestar del Servicio, de conformidad a lo que disponga el reglamento a que alude el artículo 15.

El patrimonio y los aportes de los afiliados y afiliadas del Bienestar de la Corporación Nacional Forestal, serán traspasados al nuevo Servicio de Bienestar.

Las cabañas, casas de huéspedes y otras instalaciones que hayan sido adquiridas, construidas o habilitadas para su funcionamiento, con aportes de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Nacional Forestal y administradas por su

Servicio de Bienestar, continuarán destinadas al uso de sus trabajadores, trabajadoras y ex trabajadores y ex trabajadoras que hubieren sido o sean traspasados al Servicio Nacional Forestal.

**Artículo sexto transitorio.-** Se faculta al Director o Directora Nacional del Servicio para dictar una resolución, visada por la Dirección de Presupuestos, que establezca con carácter de provisorio el estamento de guardaparques, el que tendrá vigencia hasta que dicho estamento sea efectivamente traspasado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Mientras no se produzca el traspaso del estamento que señala el inciso anterior, así como del personal que le supervisa directamente, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñen en el estamento de guardaparques estarán afectos al régimen laboral que establece la presente ley para el personal del Servicio y, además, deberá cumplir con las funciones que se les encomienden para preservar y conservar la diversidad biológica, los recursos culturales y otros de interés de las Áreas Silvestres Protegidas y para vincular dichas áreas con la comunidad, de acuerdo a la normativa legal vigente, lineamientos y políticas institucionales, planificación y procedimientos definidos, para lo cual tendrán las siguientes atribuciones y funciones:

- 1) Controlar el cumplimiento de las normas de visitación, de investigación, de protección del patrimonio contenido en las áreas, de sobrevuelo, de concesiones, entre otros.
- 2) Ejecutar las acciones tendientes a preservar y conservar la diversidad biológica, recursos culturales y otros de interés del área, que se le encomienden.
- 3) Detectar, registrar e informar el estado de conservación de la diversidad biológica y de los recursos culturales del territorio del Área Silvestre Protegida.
- 4) Detectar, registrar e informar la introducción de especies de flora o fauna exótica, u otras situaciones anómalas que observen, en patrullajes y vigilancia.
- 5) Programar y ejecutar actividades de difusión y de educación e interpretación ambiental a visitantes y comunidades aledañas e insertas.

Los guardaparques que se desempeñen en condiciones de aislamiento, percibirán una asignación por tal concepto, conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la presente ley. La determinación de áreas aisladas para estos efectos, se fijará mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Agricultura.

Se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 152 bis del Código del Trabajo al personal del estamento de guardaparques que sea necesario en épocas de mayor demanda de las áreas silvestres protegidas.

**Artículo séptimo transitorio.-** Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal deberá administrar las Áreas Silvestres<sup>44</sup> Protegidas del Estado, de conformidad a la normativa vigente<sup>45</sup>.

44 Áreas Silvestres: Los ambientes naturales, terrestres o acuáticos, pertenecientes al Estado y que éste protege y maneja para la consecución de los objetivos señalados en cada una de las categorías de manejo contempladas en el artículo 3° (ley 18.362)

45 Ley 18.362 de 27 de diciembre de 1984, que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Una vez dictada la ley<sup>46</sup> que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal deberá administrar las categorías de Parque Nacional<sup>47</sup>, Reserva Nacional<sup>48</sup>, Monumento Natural<sup>49</sup> y Reserva Forestal<sup>50</sup> de conformidad a lo dispuesto por dicha ley hasta el traspaso efectivo de dichas áreas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Con todo, la fijación de tarifas en estas áreas se efectuará por decreto del Ministerio de Agricultura, que deberá ser visado por la Dirección de Presupuestos, a proposición del Director Nacional del Servicio.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura, y visado por la Dirección de Presupuestos, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley establecerá los criterios, lineamientos, plazos y demás normas necesarias que deberán ser consideradas para la dictación del decreto a que se refiere el inciso anterior.

Desde que entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá entenderse que este servicio es aquel con competencia especial a que alude el inciso final del artículo 2 contenido en el artículo primero de la presente ley.

**Artículo octavo transitorio.-** El Presidente o la Presidenta de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional Forestal y transferirá a ella los fondos de la Corporación Nacional Forestal, para lo cual podrá crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

**Artículo noveno transitorio.-** Mientras no existan los delegados o delegadas presidenciales regionales a que alude el artículo 5 del artículo primero de esta ley, se entenderá que dichos cargos corresponderán a los intendentes.

**Artículo décimo transitorio.-** El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Agricultura. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.”.

46 Proyecto de ley en primer trámite legislativo (boletín 9404-12), ingresado al Senado el 18 de junio de 2014.

47 Artículo 5°.- Denominase Parque Nacional un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo (ley 18.362).

48 Artículo 7°.- Denominase Reserva Nacional un área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad (ley 18.362).

49 Artículo 6°.- Denominase Monumento Natural un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico (ley 18.362).

50 Artículo 7°.- Denominase Reserva Nacional un área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad (ley 18.362).



## ANEXO I

### Artículos 73 a 78 del Estatuto Administrativo:

#### De las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios

**Artículo 73.-** Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente.

Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución.

La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía.

**Artículo 74.-** Cuando la destinación implique un cambio de su residencia habitual, deberá notificarse al funcionario con treinta días de anticipación, a lo menos, de la fecha en que deba asumir sus nuevas labores.

Si ambos cónyuges fueren funcionarios regidos por este Estatuto con residencia en una misma localidad, uno de ellos no podrá ser destinado a un empleo con residencia distinta, sino mediante su aceptación, a menos que ambos sean destinados a un mismo punto simultáneamente.

**Artículo 75.-** Los funcionarios públicos podrán ser designados por el jefe superior de la respectiva institución, en comisión de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En caso alguno estas comisiones podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste requiere o a la institución.

Las designaciones en comisión de servicio a que se refiere el inciso anterior, podrán ser efectuadas por los Secretarios Regionales Ministeriales o por los Directores Regionales de servicios nacionales desconcentrados, respecto del personal a su cargo y siempre que tengan lugar dentro del territorio nacional.

**Artículo 76.-** Los funcionarios no podrán ser designados en comisión de servicio, durante más de tres meses, en cada año calendario, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

No obstante, las comisiones podrán ser renovadas por iguales períodos pero no más allá de un año. En casos calificados, por decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá extender el período de las comisiones de servicio hasta un plazo máximo de 2 años. Vencidos estos plazos los funcionarios no podrán ser designados nuevamente en comisión de servicio, hasta que transcurra el plazo mínimo de un año.

El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de funcionarios designados en comisión de servicio para realizar estudios en el país o en el extranjero hayan sido o no hayan sido beneficiados con una beca. Con todo, dicha comisión no podrá exceder de tres años, a menos que el funcionario estuviere realizando estudios de posgrado conducentes al grado académico de Doctor, caso en el cual podrá extenderse por el plazo necesario para terminar dichos estudios, siempre que el plazo total no exceda de cinco años.

El Jefe superior del servicio sólo podrá disponer estas comisiones, siempre que los estudios se encuentren relacionados con las funciones que deba cumplir la respectiva institución.

**Artículo 77.-** Cuando la comisión deba efectuarse en el extranjero, el decreto que así lo disponga deberá ser fundado, determinando la naturaleza de ésta y las razones de interés público que la justifican, a menos de tratarse de misiones de carácter reservado, en que será suficiente establecer que el funcionario se designa en misión de confianza. En todo caso, el decreto especificará si el funcionario seguirá ganando en su totalidad o en parte de ellas las remuneraciones asignadas a su cargo u otras adicionales, en moneda nacional o extranjera, debiendo indicarse la fuente legal a que deba imputarse el gasto y el plazo de duración de la comisión.

El decreto llevará, además, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.

**Artículo 78.-** Los funcionarios públicos pueden cumplir cometidos funcionarios que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño habitual para realizar labores específicas inherentes al cargo que sirven.

Estos cometidos no requieren ser ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la institución, tales como pasajes, viáticos u otros análogos, en cuyo caso se dictará la respectiva resolución o decreto.

## ANEXO II

### Párrafo 4° del Título III del Estatuto Administrativo De la subrogación

**Artículo 79.-** La subrogación de un cargo procederá cuando no esté desempeñado efectivamente por el titular o suplente.

**Artículo 80.-** En los casos de subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el desempeño del cargo.

**Artículo 81.-** No obstante, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá determinar otro orden de subrogación, en los siguientes casos:

- a) En los cargos de exclusiva confianza, y b) Cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan los requisitos para desempeñar las labores correspondientes.

**Artículo 82.-** El funcionario subrogante no tendrá derecho al sueldo del cargo que desempeñe en calidad de tal, salvo si éste se encontrare vacante o si el titular del mismo por cualquier motivo no gozare de dicha remuneración.

**Artículo 83.-** El derecho contemplado en el artículo precedente sólo procederá si la subrogación tiene una duración superior a un mes.

